

España, Marruecos y la Isla Perejil

Ángel Pérez González

La opinión pública mundial se ha sentido sorprendida en el vacío informativo del verano por el enfrentamiento entre España y Marruecos a cuenta de la ocupación de una isla, hasta entonces desconocida, de nombre Perejil. Este incidente no es más que otro episodio en una larga historia de desencuentros entre dos países vecinos de estructuras políticas y sociales profundamente diferentes.

El análisis de la organización política y social de Marruecos y el papel que juega en el país hoy la monarquía, puede servir para encontrar determinadas claves para entender este episodio.

El enfrentamiento entre España y Marruecos en torno al islote Perejil ha permitido constatar el grado de degradación alcanzado por las relaciones bilaterales, una degradación que comenzó a acelerarse inmediatamente después de la muerte de Hassan II dentro de un proceso histórico repleto de tensiones. Lo más exacto sería afirmar que las relaciones entre ambos países han estado viciadas desde un principio, esto es, desde la adquisición de la independencia de Marruecos, bajo la férula de un régimen autoritario en 1956.

Sin perder de vista otros problemas que se esconden tras los acontecimientos, a saber, la falta

de acuerdo pesquero, la situación del Sahara y la reclamación marroquí de Ceuta y Melilla, además de la inmigración ilegal y el establecimiento de límites entre espacios marinos precisos reconocidos por ambas partes; conviene considerar la reacción marroquí como un punto de inflexión que exige un serio esfuerzo de análisis.

Marruecos sufre una aguda crisis económica, política y social que se sustenta sobre una estructura de poder caótica, anticuada y ajena a criterios representativos y de participación popular. En estas circunstancias la búsqueda de tensiones exteriores legitima la monarquía, cara y corrupta; refuerza la base ideológica esencial de la que se nutren los partidos, casi todos de notables y sin base social relevante, esto es, el nacionalismo. Y ello por defecto, dado que el nacionalismo es la única fórmula que garantiza libertad de acción política en un estado extremadamente sensible a las críticas que afecten a su imagen, todavía muy consciente de su pasado colonial y donde impera un sentimiento de aislamiento reforzado por las tensiones con Argelia y el Frente Polisario.

En este escenario España ha representado en el imaginario político marroquí el papel de enemigo

por excelencia. Algo que además tenía un soporte histórico anterior a la independencia, cuando la clase política en ciernes consideraba a España indigna de ejercer el protectorado por su nivel de desarrollo y limitados recursos.

El carácter subversivo del Rif, la guerra de Ifni; la discordia del Sahara Español, permitieron acumular agravios, reales o no, que han cristalizado en la larvada hispanofobia del Majzen, a saber el monarca y su círculo político y social, donde abundan los denominados «pequeños franceses», marroquíes que se expresan en francés, viven en permanente contacto con Francia y ostentan, a veces, la doble nacionalidad (es el caso del consejero real André Azulay).

Así, los territorios que estuvieron bajo control, Rif y Tarfaya o soberanía, el caso del Sáhara, de España fueron sometidos con mano de hierro y trato vejatorio: la lengua española fue eliminada de la administración y de la escuela; los dirigentes de esas zonas discriminados o sencillamente apartados del poder; los miembros de la policía y otros cuerpos gubernamentales trasladados a otras zonas de Marruecos, llegando al extremo de quemar libros en español, como sucedió en el

Sahara Occidental, por subversivos y contrarios al nuevo orden político. Todavía hoy las regiones menos estables, como el Rif, o sencillamente en rebeldía, el Sahara, siguen fuertemente vinculadas a España. No tanto por la acción española, como creen erróneamente numerosos marroquíes, como por la voluntad de sus habitantes.

La imagen de Marruecos en España, aunque deteriorada, es algo más multiforme. La complejidad de una sociedad desarrollada democrática hace prácticamente imposible las percepciones únicas de casi cualquier fenómeno. A pesar de ello los problemas vinculados a la pesca y la inmigración; así como la sensibilidad social claramente favorable al Frente Polisario y su añorada independencia del Sahara han enquistado una imagen negativa, catapultada, además, por los grados de desarrollo político tan dispares.

La visión de un rey dictador que controla lo esencial del poder; la celebración de fastos, el último la boda de Mohamed VI, de extraños contenidos simbólicos, casi medievales, y caros en un estado extremadamente pobre no ayudan a mejorar la percepción de Marruecos. El desequilibrio en las

estructuras de poder y niveles de desarrollo generan a su vez una extraordinaria incapacidad de comunicación política. Con frecuencia los emisarios y ministros marroquíes carecen de la autoridad de sus homólogos en España, no son interlocutores válidos; el pri-

*aunque Mohamed VI ha
realizado tímidas reformas
en su entorno, no ha
realizado ninguna que
afecte al orden político ni
ha desmantelado el
ambiente cortesano
heredado de su padre*

mer ministro carece de competencias en política exterior y de seguridad; solo el rey, sometido a cambios de criterio e influencias diversas en su entorno, garantiza la seriedad de un acuerdo. Las dificultades de acceso al monarca ralentizan las conversaciones y, con frecuencia, envenenan cualquier proceso negociador.

El poder en Marruecos

Aunque la opinión pública en España es consciente de la cantidad de poderes constitucionales que recaen en el monarca alauí,

desconocen con frecuencia las características neofeudales y extremadamente corporativas del ambiente cortesano, algo estrictamente necesario para comprender el grado de corrupción política y financiera del régimen y la forma en la que se toman las decisiones en el gobierno.

Hasta la muerte de Hassan II el ambiente cortesano configuraba un mundo a parte, invisible para el resto de los ciudadanos excepto en las ocasiones elegidas, grandes festejos o celebraciones. El mundo real, cerrado, conformaba un estado dentro del estado al que se accedía con grandes restricciones y dentro del cual el poder del rey era absoluto. El mundo de concubinas, sirvientes y esclavos cuya vida y suerte dependían de los caprichos del rey tenía otro mundo político paralelo en el conjunto de personas, elegidas por el monarca, o seleccionadas tras su vida política en el exterior como forma de dominar su talante opositor, que mendigaban puestos y parcelas de poder otorgados por el rey.

Aunque Mohamed VI ha realizado tímidas reformas en su entorno, por ejemplo ha renunciado a la poligamia, no ha realizado ninguna que afecte al orden político ni ha desmantelado el ambiente cortesano heredado de su

padre, que solo ha sido marginado, quizás de forma temporal.

La clase política surgida tras la independencia aceptó el estado de cosas después de que varios golpes de estado fallidos y la dura represión real se abatiera sobre ellos. De esta manera se configura una estructura de poder dual, donde el gobierno y su primer ministro son tributarios del Mahzen y carecen de representatividad real, pues la representación del pueblo y la ostentación de la soberanía corresponden únicamente al monarca.

La división constitucional de poderes supone que el control directo del ejército, la religión, la seguridad interior y las relaciones exteriores corresponde al rey, incluyendo los nombramientos de cargos militares, gobernadores y los ministros del ramo. Estos poderes se ejercen sin contar, comunicar o recibir consejo alguno del gobierno, cuyo papel es meramente delegado y cuenta para realizar sus funciones con menos presupuesto del que dispendia el rey en el mantenimiento de sus palacios y nivel de vida.

El gobierno da cabida, tras elecciones manipuladas y de acuerdo con un orden diseñado previamente por el rey, a los partidos

políticos existentes, anulando su independencia, mientras el resto del poder se reparte de acuerdo con criterios ajenos a la formación o capacidad entre allegados y amigos del rey.

Paralelamente el sistema ha permitido anular prácticamente cualquier género de oposición. El penúltimo partido que aún quedaba fuera del sistema, el socialista, cuya oposición a la dictadura de Hassan II fue legendaria y bien conocida tras el asesinato de Ben Barka, fue anulado tras la conversión de Yussufi en primer minis-

*ante la sociedad
empobrecida los
occidentalistas simbolizan
la corrupción, los
movimientos
fundamentalistas la
integridad*

tro. Esta práctica favorece al rey, pero ha desmantelado el escaso tejido político y civil existente en el país, dejando toda iniciativa de oposición a los únicos que hasta ahora se han negado a integrarse en el sistema, los fundamentalistas.

Paradójicamente, ante la pujanza del fundamentalismo, de sus or-

ganizaciones de ayuda social y su oposición virulenta a un régimen que consideran incompatible con su visión de una sociedad justa; los grupos menos tradicionales y los partidos de corte occidental se han refugiado en el paraguas real, desperdiciando su bagaje intelectual y político y generando unas contradicciones insalvables con el comportamiento del monarca.

Ante la sociedad empobrecida, en gran parte analfabeta o de educación muy rudimentaria, todavía rural y tradicional, los occidentalistas, esa pequeña, finísima clase medioburguesa de las ciudades y sus dirigentes políticos de corte ideológico más o menos foráneo (liberales, socialistas y comunistas) simbolizan la corrupción; los movimientos fundamentalistas la integridad. A día de hoy, sin datos estadísticos que lo avalen, pues ni el principal partido de corte islámico es legal, ni las elecciones son limpias, es prácticamente segura la superioridad fundamentalista sobre cualquier otro partido o grupo de ellos. El monarca lo sabe, los gobiernos occidentales lo intuyen, y, como de costumbre, ha sido producto del despotismo de un gobierno apoyado por Occidente ante la convicción de que iba a ser capaz de realizar las reformas democráticas oportunas. Este argumento persiste hoy y ha

sido invocado por los aliados de España para solventar el enfrentamiento de la isla Perejil.

Crisis interna

Aunque aparentemente el cambio de monarca no haya generado una crisis política en Marruecos, en realidad si lo ha hecho. Por una razón sencilla, las expectativas creadas tras la muerte de Hassan II, inmensas tras años de agobiante represión y calamitosa política económica, han dado paso

entre los amigos del rey no abundan los profesionales competentes; la estructura de la administración despilfarra fondos y, un mercado competitivo y bien regulado es incompatible con la estructura del poder

una profunda decepción que parece empeñada en poner en tela de juicio el papel de la monarquía como detentadora del poder.

La escasa experiencia y, en todo caso, la ausencia de antecedentes represores todavía no han permitido que Mohamed VI adquiriera el respeto casi sagrado que disfru-

taba su padre, del que no se esperaba en realidad que hiciese nada excepcional.

De Mohamed VI si se esperaban hechos insólitos, más allá de pararse en los semáforos con su coche o presentar en sociedad a su esposa. Se esperaba una nueva política económica, más aperturista, liberal, capaz de atraer inversión exterior de forma masiva. Esta primera quimera se ha desvanecido por varias razones, a saber, entre los amigos del rey no abundan los profesionales competentes; la estructura de la administración despilfarra fondos y desanima la inversión exterior; y, sobre todo, un mercado competitivo y bien regulado es incompatible con la estructura del poder, basada en la corrupción y las dadas de todo genero.

El propio rey y un centenar de familias y acólitos monopolizan lo esencial de las empresas públicas, en sectores cerrados o solo parcialmente abiertos, mediante corruptelas y enriquecimientos indebidos. Además de las empresas francesas, protegidas por una relación especial de estado y por los vínculos sentimentales de la clase dirigente; y las 800 empresas españolas (en realidad bastantes menos, pues esta cifra incluye la sociedades creadas para realizar

negocios concretos, luego se disuelsen), que en conjunto representan una reducida parte (alrededor del 0,3%) de la inversión exterior de España; pocos más se han interesado por invertir en un país tan hermético, cuyos servicios públicos más relevantes no han sido objeto de privatización alguna.

Especial mención merece la política agraria. Todas las grandes explotaciones agrícolas pertenecen al estado, son utilizadas por el monarca a voluntad y dispone de ellas como desea (Hassan II las utilizó con frecuencia para recompensar a sus colaboradores más fieles). Y eso en un sector que sufre largas sequías, acusado minifundismo y falta de mecanización.

Se esperaba una profunda reforma administrativa, que no se ha producido ni se producirá; un cambio en la política de seguridad y orden público, que comenzó bien en el Sahara, pero terminó con el cierre de la prensa crítica con el ejército. Se confiaba en un esfuerzo social. Para Hassan II la pobreza del país no existía. Mohamed VI sabe que existe, pero al respecto, hasta ahora, no ha hecho más que gestos. Y sobre todo se esperaba una seria reforma política que transformara el estado en

un ente más democrático y homologable con los regímenes occidentales. Tal transformación encierra riesgos notables para el poder constituido, que a su vez tendrán una proyección exterior preocupante para Occidente.

Para el Majzen supone tanto como autodisolverse, además de generar un estado de cosas en el que pudieran multiplicarse las acusaciones y críticas a la monarquía por su incapacidad para modernizar el estado. Lo que estaría en juego sería la propia supervivencia del Majzen, quizás también de la monarquía, sobre todo si, como es previsible, los fundamentalistas adquirieran un peso político acorde con su peso social. Este temor es esgrimido en Europa y Estados Unidos para apoyar al rey, generando un círculo vicioso en el que la monarquía sale respaldada dentro y fuera del país, pero deslegitimada también dentro y fuera de Marruecos.

La salida a la tensión colectiva que genera esta situación la conforma el nacionalismo, cuya representación última sería el rey, que encuentra allí una fuente de legitimidad inagotable y fácilmente manipulable. Sin embargo este proceso no impide la degradación del sistema y crea, a medio plazo, una inseguridad mayor,

pues consolida el estado de incapacidad y corrupción presente con el argumento baladí de que cualquier cambio entraña un riesgo no asumible.

La estructura del poder en Marruecos constituye un serio obstáculo para el desarrollo económico y un problema de seguridad inevitable a medio plazo, cuando la legitimidad que le reste el monarca se desvanezca y se convierta en un aliado incómodo.

Las deficiencias que se han descrito influyen, como no, en la forma de comprender las relaciones internacionales, algo que afecta a España de forma especial, pues los desequilibrios orgánicos entre un estado y otro multiplicarán las tensiones en el futuro como lo han hecho en los últimos años.

El incidente de isla Perejil

En este contexto debemos enmarcar el incidente, grave, de la isla Perejil. Diferenciando entre la crisis en cuestión y los elementos de fondo que la explican, y huyendo de los argumentos insostenibles que presuponen una culpabilidad compartida.

Los hechos responden a una interpretación de lo que debe ser la ac-

ción exterior de un estado despótico, colonialista, pues la ocupación del Sahara, con independen-

*incidentes parecidos
podrían haber estallado en
cualquiera de los imprecisos
puntos que separan las
aguas territoriales de uno y
otro estado*

cia de la solución final del conflicto, no es otra cosa que colonialismo; y donde el poder está estrechamente vinculado al ejército, soporte de la monarquía y defensor a ultranza de la política de represión de la sociedad civil y colonización de las tierras saharauis. Por tanto se trata de una formulación clásica: estado débil, economía crítica, ejército fuerte, influencia de la acción colonial en la metropoli, libertades civiles restringidas y confusión entre intereses del estado e intereses del Majzen.

Un estado de estas características desarrolla por necesidad una política exterior agresiva, así ha sido desde la independencia; y lo seguirá siendo mientras el estado carezca de legitimidad popular y hunda sus raíces en la consecución de objetivos nacionalistas, a saber, expansión territorial y prestigio exterior.

Las razones de fondo que han motivado la crisis hay que buscarlas en el Sahara, donde la monarquía se juega su supervivencia. Para consolidar una actitud internacional favorable a la integración definitiva de la excolonia española es necesaria la aquiescencia de España, conseguida ya las de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La moneda de cambio ofrecida por el régimen alauí no es otra que la suspensión temporal de sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, y el incidente de Perejil no ha pretendido más que recordar que la capacidad de amenazar y generar tensiones es elevada y seria.

Se ha elegido Perejil porque la ocupación era vistosa, pero incidentes parecidos podrían haber estallado en cualquiera de los imprecisos puntos que separan las aguas territoriales de uno y otro estado; o, porqué no, en las fronteras de Ceuta y Melilla. En pocas palabras, las posibilidades de roces futuros, voluntarios o no, en un ambiente de tensión, son numerosos.

Sin embargo el desarrollo de los acontecimientos, que han incluido la realización de una operación militar para desalojar el islote, si ha supuesto una ruptura notable de las tradicionales reacciones españolas, imbuidas de un apaci-

guamiento que solo ha alimentado la voracidad de un Majzen ávido de triunfos que refuercen su legitimidad.

El error del monarca marroquí se ha basado en la extrapolación de premisas del pasado, sin mayor adaptación, al presente. La ocupación de Perejil es una acción propia de Hassan II, padre de Mohamed VI, puesta en práctica en el Sahara en 1975; así como en el desconocimiento creciente de España y su funcionamiento actual en el entorno del rey. La discriminación de colaboradores y políticos procedentes del antiguo protectorado español y la política antiespañola de la administración marroquí durante los últimos 30 años ha generado, paradójicamente, un problema táctico. Nadie sabe hoy como conectar con España. Por tanto no se esperó una reacción contundente que incluía, por primera vez en 25 años, el uso unilateral de la fuerza y un despliegue en el estrecho que evidenciaba la escasa voluntad de tolerar amenazas mayores.

La acción, que también ha sorprendido entre los socios europeos de España, traduce una confianza notable en su capacidad política y militar, que ha humillado al monarca y, a buen seguro, generará una crisis en el estrecho

círculo de colaboradores directos del rey (algunos miembros del gobierno, marginado por completo en esta crisis, han exigido veladamente responsabilidades). Este hecho, por sí solo, garantiza, en un estado personalista, un futuro incierto a unas relaciones ya muy maltrechas.

El final diplomático de la crisis fue escenificado el pasado día 22 de julio tras una reunión entre los ministros de asuntos exteriores de ambos países en Rabat y la emisión de una nota que establecía la confirmación del *statu quo* anterior al 11 de julio de 2002; reconocía las diferencias de criterio entre España y Marruecos sobre la soberanía de la isla y vinculaba el acuerdo a las condiciones establecidas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Collin Powell, en la carta de mediación enviada a ambas partes, carta que proponía el *statu quo*, la ausencia de símbolos en la isla y el uso de la isla por las partes en las condiciones en que tenía lugar antes de la crisis. Por lo demás, las relaciones quedan como estaban, con altas posibilidades de empeorar a pesar del compromiso de iniciar contactos a partir de septiembre de 2002.

Las lecciones del conflicto

Las lecciones estratégicas de este conflicto, que no es pequeño,

pues el enfrentamiento entre España y Marruecos es antiguo y está recorrido por todo tipo de divergencias, deberán ser tenidas en cuenta por ambas partes tanto si las relaciones mejoran como si hacen lo contrario.

Para España la experiencia ha sido de notable trascendencia. Es cierto que la operación militar de ocupación de la isla no encontró resistencia y se realizó con una superioridad aplastante, pero se trató de la primera acción militar fuera de estructuras internacionales en muchos años. Supuso romper la inercia, contraria a una acción de fuerza; puso a prueba a las Fuerzas Armadas, que han tenido oportunidad real de comprobar el funcionamiento de los operativos previstos, y ha traducido algo que era evidente desde hacía varios años, la consolidación de España como potencia internacional, más segura de sí misma y menos dispuesta a aceptar hechos aparentemente consumados. El cambio de mentalidad estratégica es, por tanto, profundo.

Más allá de la acción militar los sucesos de Perejil han puesto de relieve la fragilidad de la relación hispanomarroquí, poniendo sobre el tapete la posibilidad de una ruptura total y la imposibilidad de consolidar una relación estable existiendo fuertes conflictos de in-

tereses y un evidente desequilibrio institucional entre ambos estados para tratarlos.

Los hechos también han permitido aclarar la reacción de los alia-

la razón fundamental que explica la continua tensión entre España y Marruecos no es el cúmulo de diferencias a propósito de los más diversos temas existentes entre ambos países

dos. Apoyo inicial, recomendaciones de calma, frialdad final y posicionamiento marginal de los estados con intereses más relevantes en la zona, como ha sucedido con Francia. La coherencia de la política exterior europea ha resultado ser una víctima más del conflicto.

La acción de mediación, formal o informal, ha procedido de los EEUU, que han dejado claro su interés en un Marruecos estable. Están por ver las consecuencias de la intervención de ese país en una cuestión que generará más problemas en el futuro y afecta seriamente a los intereses estratégicos españoles, pero fuere cual fuere, los hechos demuestran que hay espacio para una política au-

tónoma en la zona que responda a intereses propios capaz de mediatizar las actitudes de otros estados involucrados.

Mohamed VI también estudiará detenidamente los acontecimientos. La acción militar, aunque simbólica, ha forzado una solución diplomática inesperada y contraproducente para la imagen del poder. Está claro que la insistencia, pacífica o no, en la reclamación de Ceuta y Melilla generará una enconada reacción española, y ha quedado claro que los recursos políticos de España no son los mismos que en 1975.

Dado que el objetivo de acciones de fuerza no es otro que reforzar la legitimidad del rey, la incapacidad para llevarlos a buen puerto, como ha sucedido en el caso de isla Perejil, supone correr un riesgo elevado; añadido a la posibilidad de no obtener el respaldo de la ONU sobre el futuro del Sahara o de que este apoyo, ante la oposición del Frente Polisario y Argelia, y la frialdad de España, se convierta en papel mojado. La reanudación de la guerra en la zona, con su coste insostenible en términos de imagen, obligará a Marruecos a insistir en su táctica agresiva.

Todo menos realizar verdaderas reformas políticas. Sin duda este fenómeno afectará a España. Pero

si bien desde este punto de vista el fracaso de la acción de Marruecos es evidente, si ha tenido éxito a la hora de resituar en primera línea de discusión aquellos conflictos latentes, en este caso con España, forzando además la intervención de terceros y la división de pareceres dentro de la Unión Europea. De ambas conclusiones intentará el monarca sacar algún partido.

Conclusión

La razón fundamental que explica la continua tensión entre España y Marruecos no es el cúmulo de diferencias a propósito de los más diversos temas existentes entre ambos países. Prácticamente todos esos problemas tienen solución, simplemente utilizando el sentido común y desarrollando políticas de colaboración estables.

No hay nada que impida a España y Marruecos negociar unos límites marítimos razonables y acordes con la legalidad internacional; nada impide colaborar en la persecución del narcotráfico o en la gestión del problema migratorio; nada hace imposible compartir el uso de la isla Perejil. Todos los asuntos, excepto el estatus de Ceuta y Melilla, obviamente, son negociables. Pero para eso ambas partes deben desear

llegar a un acuerdo equilibrado, actitud que ha faltado siempre en el monarca marroquí. Ese desequilibrio de voluntades se debe a la estructura política de Marruecos. Su escaso grado de democracia; la casi nula representación de intereses no vinculados al rey; el uso abusivo del nacionalismo como base ideológica del régimen; el uso permanente de la fuerza dentro y fuera del país para alcanzar objetivos políticos ponen de manifiesto unas carencias que hacen inevitable el conflicto. Agresividad exterior, expansionismo y escaso respeto por los derechos individuales y colectivos (mujeres, bereberes, saharauis) constituyen las reacciones del régimen alauí ante cualquier riesgo que pudiera afectar a su actual *modus vivendi*.

La solución es evidente. Todas las dictaduras tienen características de fondo similares y dan soluciones similares a sus problemas internos. Solo hay que recordar a la dictadura argentina ocupando las Malvinas; o, sin ir más lejos, a las dictaduras europeas en los años treinta del pasado siglo provocando una guerra mundial. Dada la degradación del régimen y la caótica situación social y económica del país no sería muy aventurado decir que lo peor está por venir. ■